

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1735 DE 2013

23 SET. 2013

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, respectivamente, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO ADJUNTO
PARA SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL**

En uso de sus facultades legales y, en especial, de las que le han sido conferidas en el numeral 2° del artículo 11.2.1.4.34 del Decreto 2555 de 2010, en armonía con lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Parte Primera, Título III, Capítulo VI, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que mediante la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, la Superintendencia Financiera de Colombia, a través del Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión Institucional, ordenó en su artículo primero a los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, respectivamente, hoy ex representantes de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA actualmente EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, bajo apremio de multas sucesivas hasta por 500 SMLMV, cada una, la **SUSPENSIÓN INMEDIATA** de las actividades que constituyen captación o recaudo de dineros del público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto por el artículo 108 del EOSF, en armonía con el artículo 90 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, dicha orden "(...)supone para los destinatarios de la misma, la imposibilidad de realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público, en forma masiva, usando cualquier modalidad contractual, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas".

Así mismo se dispuso en su artículo segundo, "**PREVENIR** sin perjuicio de la orden antes impartida a la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA actualmente EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, con fundamento en el Parágrafo Primero del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para que por conducto de su Liquidadora, coordine las acciones que resulten pertinentes a juicio de la Superintendencia de Sociedades en su calidad de autoridad administrativa competente, de manera privativa, para adelantar la intervención necesaria para devolver los recursos obtenidos en desarrollo de las actividades objeto de la presente Resolución. Para el efecto se remitirá copia del presente acto administrativo a la Liquidadora de sociedad comisionista de la Bolsa Mercantil".



Superintendencia
Financiera
de Colombia

Radicación 2013035892-106-000

Fecha: 23/08/2013 11:43 AM Sec. Dia: 408

Trámite: 366-CAPTACIÓN ILEGAL Y OPER. N Anexos: No Salida

Tipo Doc: 36-RESPUESTA FINAL E Folios: 8

Aplica A: - Encadenado: SI

Remitente: 110010 Grupo de Prevención y Solicitudes

Destinatario: 401-18 TORRES CORTES S.A. Teléfono: 594 02 00

Carro: Ent: Caja: Pos: 16/10/2013

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

SEGUNDO. Que el referido acto administrativo¹, fue notificado el 9 de julio de 2013 personalmente a la doctora MARTHA CILIA NIETO LÓPEZ liquidadora de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA y por aviso, en cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 13 del Decreto 4334 de 2008, a los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, respectivamente, fijado en el domicilio de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA en la Calle 114 número 6 A -92 en Bogotá, tal y como se lee en la constancia elaborada para el efecto que obra en los antecedentes de la actuación administrativa, previniéndose en ambos casos tal y como se indicaba en el artículo Décimo Tercero de la parte resolutive de la citada Resolución, que contra dicho acto administrativo procedía el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión Institucional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la respectiva notificación, los cuales vencieron el 23 de julio de 2013.

TERCERO. Que el 23 de julio de 2013, en escrito presentado personalmente ante la Notaría 44 de Bogotá el 22 de mismo mes y año, radicado en esta Entidad con el número 2013035892-060-000, el doctor LUIS FERNANDO ROMÁN FERNÁNDEZ identificado con la cédula de ciudadanía número 7524891 y con la T.P. No. 126.899 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado del señor LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO con cédula de ciudadanía número 79.524.060, circunstancia que acreditó con la presentación del poder presentado personalmente ante la citada Notaría 44 de Bogotá el 22 de julio de 2013, interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013 con la finalidad que se reponga la misma.

CUARTO. Que en el escrito allegado a esta Superintendencia, el doctor Román Fernández expuso los motivos de inconformidad frente a la referida Resolución 1243 del 05 de julio de 2013, que se concretan en tres (3) temas principales y que sustenta en argumentos comunes como se transcriben, en el mismo orden en que fueron expuestos, seguidas de las consideraciones que le merecen a esta Superintendencia:

4.1. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

Según lo expone el doctor Román Fernández, en la expedición de la Resolución que recurre, esta Superintendencia incurrió en las violaciones que se indican a continuación, las cuales sustenta en los siguientes argumentos:

4.1.1 *"Violación al debido proceso por desconocimiento al principio de la contradicción de la prueba".*

4.1.2.- *"Violación al principio de debida sustentación probatoria de las decisiones administrativas".*

4.1.3. *"Violación al artículo 4 del decreto 4334 del 2008 que exige como condición esencial para decretar la intervención administrativa de que trata esa norma, la existencia de hechos notorios y objetivos que señalen (sic) la existencia de captación de recursos del público a través de operaciones no autorizadas, es decir aquellas que además de otros cumplir otros supuestos, (sic) superan el 50% del patrimonio neto de quien recibe los recursos".*

El recurrente sustenta las anteriores violaciones en lo siguiente:

"1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 316 del Código Penal, complementado por los Decretos 2920 de 1982, 3227 de 1982, 1981 de 1988, 4336 (sic) de 2008 y por la Ley 1357 de

¹ Cuyo texto además fue publicado en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera de Colombia No. 278 del 12 de julio de 2013.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2013: 1735

Hoja No. 3

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

2009, la conducta de captación masiva y habitual de recursos del público sin autorización legal se presenta cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a) Realización de operaciones de recepción de dinero en las que no se contemple contraprestación alguna de bienes y/o servicios, es decir cuando la única causa jurídica subyacente a la captación o recaudo es el contrato de mutuo comercial.

b) Que estas operaciones de mutuo comercial conformen más de 50 obligaciones o se realicen con más de veinte (20) personas.

c) Que la sumatoria de las operaciones ya descritas supera el 50% del patrimonio líquido del receptor del dinero o hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas.

Todos los supuestos de hecho anteriormente relacionados deben converger para que se pueda predicar la conducta de captación ilegal de recursos de tal suerte que la inexistencia de uno cualquiera de los requisitos anteriormente enunciados impide la materialización de la conducta comúnmente denominada captación ilegal de dinero.

2.- El artículo 6º del Decreto 4332 (sic) del 2008 otorgó facultades a las Superintendencias Financiera y de Sociedades para decretar la intervención administrativa de que trata el artículo 2º del mencionado decreto, cuando a juicio de dichas entidades "existan hechos objetivos o notorios" que "indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable" (Subrayo)

3.- Tanto en materia penal como administrativa los supuestos a los que se alude en el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008, es decir la existencia de hechos objetivos o notorios que indiquen recaudo de dinero del público por medio de operaciones no autorizadas, se deben interpretar (sic) en forma conjunta y armónica con lo señalado en los Decretos 2920 de 1982, 3227 de 1982 y 1981 de 1988 normas que en conjunto determinan, para todos los efectos legales, qué se entiende por operaciones de captación de dinero del público no autorizadas.

Lo anterior significa que la definición del término "operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas" al que se refiere el artículo 6º del Decreto 4334 del (sic) 2008, no es de libre interpretación por parte de los funcionarios de la Superintendencia Financiera toda vez que este concepto está claramente definido por el conjunto de normas sustanciales ya identificadas: Decretos 2920 de 1982, 3227 de 1982 y 1981 de 1988, definición a la cual deben acudir obligatoriamente los funcionarios de la Superintendencia Financiera al momento de ordenar el procedimiento administrativo de que trata el artículo 2º del Decreto 4334 del 2008.

Por tanto los "hechos objetivos o notorios" a los que se refiere el artículo 6º del Decreto 4334 del (sic) 2008 son aquellos hechos que demuestran la existencia objetiva de operaciones de recaudo de dinero no autorizadas, es decir recaudo de dineros sin contraprestación de bienes o servicios, celebradas con más de 20 clientes o en número mayor de 50 operaciones, siempre que estas operaciones superen el 50% del patrimonio neto de quien recibió el dinero o se efectúen a través de oferta pública.

4.- Del estudio del expediente administrativo y del texto mismo de la Resolución 1243 recurrida, se concluye sin duda alguna que la Superintendencia Financiera ni siquiera se ocupó de determinar cuál era el patrimonio neto de mi poderdante, referencia sin la cual no es posible saber si estamos, o no, frente a una conducta de captación ilegal de recursos del público, a su vez condición esencial para poder decretar legalmente la intervención administrativa que nos ocupa.

El acervo probatorio que fundamentó la expedición de la Resolución 1243 no hace referencia a ninguna prueba relacionada con la determinación del patrimonio neto del señor LEONEL JOSE TORRES JARAMILLO.

Ello es así, simplemente porque la Superintendencia Financiera omitió ordenar la práctica de esta

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2013 *1735*

Hoja No. 4

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

trascendental prueba, la ignoró y procedió a decretar una intervención administrativa sin que se acreditaran todos los elementos de que trata el artículo 6° del Decreto 4334 del (sic) 2008, elementos claramente definidos en los Decretos 2920 de 1982, 3227 de 1982 y 1981 de 1988, dentro de los cuales se incluye el hecho esencial de que los recursos recibidos superen el 50% del patrimonio neto de quienes los recibieron.

En efecto para poder determinar si las operaciones que la Superintendencia Financiera a través de la Resolución 1243 calificó como operaciones de captación ilegal de recursos del público por parte de mi poderdante, efectivamente si configuran captación ilegal de recursos del público es indispensable determinar el patrimonio neto del señor LEONEL JOSE TORRES JARAMILLOA (sic) y de su padre y verificar si lo recibido en préstamo por ellos supera o no el 50% de dicho patrimonio neto.

El patrimonio neto de una persona es un concepto técnico contable y tributario que debe determinarse a partir de la elaboración de los balances generales de las personas que recibieron los recursos. El balance general es un estado financiero que por su carácter técnico debe ser elaborado por un contador público, profesional idóneo para estas actividades.

En consecuencia la Superintendencia Financiera al dictar la Resolución 1243 desconoció el contenido de los Decretos 2920 de 1982, 3227 de 1982 y 1981 de 1988, normas que determinan que la conducta de captación ilegal de recursos del público se presenta cuando, además de otros elementos fácticos ya enunciados, los recursos recibidos superan el 50% del patrimonio neto de quien recibió el dinero.

El desconocimiento del contenido de los Decretos 2920 de 1982, 3227 de 1982 y 1981 de 1988 impulsó a la Superintendencia Financiera a aplicar indebidamente el artículo 6° del Decreto 4334 del (sic) 2008 motivo de evidente ilegalidad de la Resolución recurrida por inexistencia de la prueba necesaria para acreditar la existencia notoria de operaciones de captación ilegal de recursos.

5.- Del texto de la Resolución 1243 objeto del presente recurso se deduce que el soporte fáctico principal sobre el cual el señor Superintendente Delegado fundamentó la declaratoria de captación ilegal de recursos fue la información enviada a la Superintendencia Financiera por parte de la Doctora MARTHA CILIA NIETO LOPEZ liquidadora designada por el FOGAFIN para adelantar el proceso de toma de posesión y liquidación forzosa administrativa de la sociedad TORRES CORTES SA, COMISIONISTA DE BOLSA.

Esta información consiste en una lista de personas que según afirma la liquidadora se acercaron a reclamar ante la oficina de la sociedad TORRES CORTES, COMISIONISTA DE BOLSA dineros entregados a los entonces representantes legales de dicha sociedad señores JOSE LEONEL TORRES CORTES y LEONEL JOSE TORRES JARAMILLO.

La lista fue acompañada de copia de comprobantes y otros documentos comerciales pertinentes.

Sin embargo, la propia Doctora MARTHA CILIA NIETO LOPEZ manifestó claramente y por escrito a la Superintendencia Financiera que la información remitida debía someterse a verificación y revisión por cuanto ni siquiera ella misma tenía certeza de lo que los terceros habían reclamado:

"(...) Hemos sumado las inversiones anteriores advirtiendo que están sueltas a revisión debido a la cantidad de documentos presentados por cada inversionista que en muchas ocasiones no presentaron claramente la inversión final. (...) Subrayo"

No obstante lo anterior, la Superintendencia Financiera hizo caso omiso de la clara advertencia elevada por la señora liquidadora y no adelantó la más mínima labor de revisión y verificación de dichas reclamaciones y consideró, sin confirmación alguna, que la lista de las reclamaciones efectuadas por terceras personas a la liquidadora de la sociedad TORRES CORTES COMISIONISTA DE BOLSA, lista claramente incierta en opinión de quien recibió las reclamaciones, era suficiente elemento probatorio para declarar que mi poderdante y su padre captaron ilegalmente del público (sic) dineros por la suma de Trece Mil Novecientos Cuarenta y Siete Millones Novecientos Treinta Mil Ciento Cincuenta y Siete pesos ML (\$13.947.930.157) en Ciento Setenta y Un (171) operaciones con Setenta (70) personas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2013 - 1735

Hoja No. 5

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

El anterior proceder, además de ser el resultado de la total ausencia de una actividad probatoria por parte de la Superintendencia Financiera, entidad que debió proceder a verificar la realidad de las reclamaciones, también desconoce abiertamente el principio de la contradicción de la prueba y en consecuencia es violatorio del debido proceso.

En efecto, aunque en el presente caso, en principio, por tratarse de la declaratoria de una captación con base en la existencia de hechos notorios y objetivos no era obligatoria la aplicación del procedimiento administrativo consagrado en el artículo 208 del EOSF, sin embargo frente a la indudable existencia de una duda relevante relacionada con la verdadera cuantía de las reclamaciones inventariadas por la agencia liquidadora de la sociedad TORRES CORTÉS, COMISIONISTA DE BOLSA, era obligatorio que la Superintendencia Financiera diera traslado de dichas dudas a mi poderdante y a su padre y adelantara las actuaciones administrativas requeridas para verificar los hechos calificados de inciertos por la propia fuente de información, permitiendo el ejercicio del derecho a la contradicción de la prueba.

La facultad contenida en el artículo 6 del Decreto 4334 del (sic) 2008 opera en aquellos eventos en que la captación se expresa en hechos indudables, evidentes, notorios y objetivos que señalen la real existencia de la captación a través de operaciones no autorizadas.

En los demás casos, cuando el material probatorio a disposición de la Superintendencia Financiera no permita inferir de manera certera la totalidad de elementos del tipo administrativo de captación ilegal de fondos, la Superintendencia Financiera está en la obligación de adelantar el procedimiento administrativo regulado por los artículos 208 y siguientes del EOSF, obligación que omitió cumplir en el caso que nos ocupa no obstante la advertencia de la liquidadora de someter a revisión la información que ella envió.

Se recuerda, además, que la Doctora MARTHA CILIA NIETO LOPEZ no es una funcionaria judicial. Sus informes no son ni actos administrativos ni mucho menos judiciales como para que estén revestidos de la doble presunción de legalidad y acierto, razón por la cual la Superintendencia Financiera estaba en la obligación de verificar la información suministrada, máxime cuando la propia liquidadora advirtió de la necesidad de verificar la información.

En el caso que nos ocupa no existen hechos notorios, objetivos, indudables que indiquen que mis poderdantes incurrieron en la conducta de captación ilegal de recursos. Lo que existe es un informe de la liquidadora que tiene más la categoría de solicitud de investigación que de afirmación categórica de hechos objetivos de captación.

El mencionado informe además advierte a la propia Superintendencia Financiera de las dudas de fondo ya expresadas. Ante este informe la Superintendencia Financiera estaba en la obligación de abrir una investigación formal tendiente a determinar, conforme a las normas del debido proceso, la presencia de la conducta de captación, lo cual, como mínimo, requería de la notificación a mis poderdantes para que ejercieran el derecho a la contradicción de la prueba (...).

4.2. CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De la lectura de la argumentación contenida en el recurso de reposición que nos ocupa, encontramos varios errores de interpretación normativa en los que incurre el recurrente, tales como que para establecer la existencia de las operaciones de captación no autorizada de dineros respecto de una persona, esta Superintendencia además de establecer la existencia de los hechos objetivos o notorios a los que se refiere el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008, debe necesariamente demostrar que en la misma operación se configuran todos los supuestos establecidos en el Decreto 1981 de 1988; y que ante la existencia de dudas de si en una operación se encuentran o no configurados los hechos objetivos o notorios o supuestos de la citada actividad no autorizada, debe agotarse el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

DE 2013

1735

Hoja No. 6

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

Tampoco es acertado afirmar, como lo hace el apoderado que en el caso que nos ocupa se hubiera presentado cualquiera de las violaciones a las que alude en su escrito y, principalmente, el no haber demostrado la existencia de la captación no autorizada de dineros del público porque la medida impuesta no da cuenta del patrimonio líquido de su poderdante o, porque, a su juicio, no se verificó para establecer la verdadera cuantía de las reclamaciones inventariadas por la liquidadora, la información aportada por la agente liquidadora de la SCBM, Dra. Martha Cilia Nieto López, documentación que dio inicio a la actuación administrativa que concluyó con la imposición de la medida cautelar que recurre, toda vez que a su juicio, no le fueron dados a conocer a su poderdante en forma previa a la expedición de la medida administrativa que nos ocupa los hechos que sobre la cuantía de lo captado fueron calificados como inciertos por tal agente liquidadora; situaciones por las cuales concluye que se desconoció el principio de contradicción de la prueba y en consecuencia se violó el debido proceso.

Lo anterior, aparece soportado en el análisis que efectuaremos a continuación:

4.2.1. De la aplicación del artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 (hechos objetivos o notorios) y del Decreto 1981 de 1988 (supuestos de captación no autorizada de dineros)

En relación con la figura de la captación o recaudo no autorizado de dineros del público en forma masiva, se considera de importancia anotar que en la actualidad las disposiciones legales que hacen referencia a la materia, se encuentran consignadas en el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008 y en el Decreto 1981 de 1988.

En efecto, en el artículo 6° del Decreto de 2008 está previsto que son hechos objetivos o notorios de captación aquellos que: *"(...) indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable"*.

Así mismo, en el Decreto 1981 de 1988, están consagrados los siguientes supuestos de captación no autorizada de dineros:

"Artículo 1° del Decreto 3227 de 1982, modificado por el artículo 1° del Decreto 1981 de 1988. Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se entiende que una persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual en uno cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando su pasivo para con el público esté compuesto por obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona.

Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios.

2. Cuando, conjunta o separadamente, haya celebrado en un período de tres (3) meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y contra reembolso de un precio.

Para determinar el periodo de los tres (3) meses a que se refiere el inciso anterior, podrá tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o de las operaciones de venta.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2013 • 1735

Hoja No. 7

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

Parágrafo 1º. En cualquiera de los casos señalados debe concurrir además una de las siguientes condiciones:

- a) Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona, o*
- b) Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares.*

Parágrafo 2º. No quedarán comprendidos dentro de los cómputos a que se refiere el presente artículo las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y único civil, o con los socios o asociados que, teniendo previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociación durante un período de seis (6) meses consecutivos, posean individualmente una participación en el capital de la misma sociedad o asociación superior al cinco por ciento (5%) de dicho capital".

Por su parte, en el artículo 108 del EOSF se establece cuáles son las medidas cautelares que puede adoptar la Superintendencia Financiera de Colombia. El mencionado artículo 108 establece:

"Medidas cautelares. Corresponde a la Superintendencia Bancaria imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de las instituciones vigiladas sin contar con la debida autorización:

- a. La suspensión inmediata de tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por un millón de pesos (\$1'000.000.) cada una;*
- b. La disolución de la persona jurídica, y*
- c. La liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas ilegalmente, para lo cual se seguirán en lo pertinente los procedimientos administrativos que señala el presente Estatuto para los casos de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de las instituciones financieras.*

Parágrafo 1º. La Superintendencia Bancaria entablará, en estos casos, las acciones cautelares para asegurar eficazmente los derechos de terceros de buena fe y, bajo su responsabilidad, procederá de inmediato a tomar las medidas necesarias para informar al público.

Parágrafo 2º. La Superintendencia Bancaria podrá imponer las sanciones previstas en los artículos 209 y 211 a cualquier persona que obstruya o impida el desarrollo de las actuaciones administrativas que se adelanten para establecer la existencia de un eventual ejercicio ilegal de actividades exclusivas de las entidades vigiladas, así como a aquellas personas que le suministren información falsa o inexacta."

En el anterior contexto legal, procede tener presente que en el artículo 6 del citado Decreto 4334 de 2008, se enuncian a modo simplemente ilustrativo los modelos de negocio en los que se presenta la captación no autorizada de dineros como las pirámides, las tarjetas prepago, las operaciones de venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable,

Así mismo, en el artículo 6º del citado Decreto se establecen los hechos objetivos o notorios, entendidos los primeros como aquellos que existen en forma real y verdadera, que efectivamente señalan y de los que pueda inferirse, la entrega masiva de dineros en operaciones no autorizadas.

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

Por su parte, como "hecho notorio" de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional, en Sentencia C-145 del 12 de marzo de 2009. Magistrado Ponente Nilson Pinilla Pinilla, debe entenderse "(...) *aquel cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo; así mismo, según el artículo 177 del C.P.C., los hechos notorios no requieren prueba*".

En consecuencia, para verificar la existencia de la captación no autorizada de dineros del público en forma masiva respecto de una persona no vigilada por esta Superintendencia o por la Superintendencia de Economía Solidaria, una vez comprobada la existencia de los hechos objetivos o notorios consagrados en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008, no se requiere la remisión normativa para acreditar además, la existencia de los supuestos consagrados en el Decreto 1981 de 1988.

No sobra advertir, que no obstante, se ha considerado que los hechos objetivos o notorios de esta conducta ilegal, si bien no exigen la configuración adicional de los supuestos de captación previstos en el Decreto 1981 de 1988, no excluyen la posibilidad de que tanto la Superintendencia de Sociedades como esta Superintendencia, en las actuaciones que adelanten para establecer la existencia de tal conducta ilegal puedan comprobar además, dichos supuestos de captación.

Así lo manifestó la Corte Constitucional en la Sentencia C-145 de 2009 proferida en el Expediente RE 137, mediante la cual se efectuó revisión constitucional de dicho Decreto. Veamos:

" (...) Lo anterior significa que cuando la Superintendencia de Sociedades decide intervenir a personas naturales o jurídicas que captan recursos sin autorización estatal, puede actuar sin tener que demostrar previamente la existencia de cualquiera de las modalidades que asume dicha actividad, las cuales real y objetivamente han de ser públicas y evidentes, en cuanto se supone que son conocidas por la generalidad de las personas, lo que no excluye la posibilidad de que esa Superintendencia también intervenga con base en la previa comprobación motivada de los hechos atinentes a la captación masiva y habitual de dineros del público sin autorización del Estado.

Considera la Corte que la medida en estudio resulta indispensable para los fines de la emergencia social y el ejercicio de la competencia atribuida a ese órgano de Inspección, control y vigilancia, ya que le permitirá actuar de manera ágil, expedita y eficaz sin necesidad de pre constituir pruebas contables sobre la existencia de esas circunstancias, que sería lo procedente si observara el trámite ordinario, lo cual representaría un obstáculo para la consecución de los propósitos establecidos con la emergencia social y en el Decreto Legislativo en revisión, según se explicó con anterioridad.(...)"

Ahora bien, de encontrarse en una actuación administrativa adelantada por esta Entidad en cumplimiento del objetivo establecido en el literal d) del numeral 1 del artículo 325 del EOSF, configurados los hechos objetivos o notorios de captación no autorizada de dineros del público, mismos de que trata el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008, esta Superintendencia con fundamento en tales hechos y sin acudir a la demostración de los supuestos consagrados en el Decreto 1981 de 1988, debe ordenar la medida administrativa cautelar por la captación ilegal de recursos, abstrayéndose, hasta donde sea posible, de cualquier subjetividad en el juicio valorativo que se realice de la respectiva operación sin que sea requisito que se cumplan además, los supuestos consagrados en el Decreto 1981 de 1988. Basta que esté probada la configuración de los hechos objetivos o notorios para que proceda la imposición de la medida administrativa cautelar que corresponda.

Por lo expuesto, si procediera la interpretación invocada por el abogado recurrente en el

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2013 1735

Hoja No. 9

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

escrito que se analiza, debería preguntarse qué sentido hubiera tenido la declaratoria de la emergencia económica mediante el Decreto 4333 de 2008 y la consecuente expedición del Decreto 4334 del mismo año?, cuál sería el objetivo pretendido por el legislador al consagrar en el artículo 6 de dicho Decreto los hechos objetivos o notorios de dicha conducta ilegal, cuando a la fecha de su expedición ya existía en el mundo jurídico una norma que establecía unos supuestos para configurarla?.

Para dar respuesta a tales interrogantes, no debe olvidarse los motivos y la finalidad para la cual se expidió el Decreto 4334 de 2008, para lo cual es pertinente traer a colación algunos de los apartes expuestos por la Corte Constitución en la Sentencia C-145 de 2009 proferida en el Expediente RE 137, mediante la cual se efectuó revisión constitucional del Decreto 4334 de 2008, en el siguiente sentido, al citar la intervención del apoderado de la Superintendencia Financiera:

" (...)

Indica que por tratarse de actividades ilegales éstas se adelantan de manera informal, al punto que no existe en la mayoría de los casos libros y papeles del comerciante que permitan obtener evidencia sobre las transacciones y que constituyan plena prueba de cuanto en ellos esté contenido; tampoco los estados financieros son preparados conforme a la ley, ni cuentan con los soportes correspondientes y carecen de auditoría y además las transacciones se efectúan en efectivo, por lo cual no quedan rastros documentales para su seguimiento.

Expresa que una intervención de las autoridades competentes bajo las normas vigentes antes del estado de declaratoria de emergencia, implica sujetarse al cumplimiento de una rigurosidad probatoria y procedimental para establecer la existencia de una captación masiva y habitual e ilegal con el fin de blindar jurídica y probatoriamente los actos administrativos expedidos por el supervisor en esta materia.

Señala que en tal sentido, dada la presunción de inocencia y garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa de la persona natural o jurídica objeto de la investigación, de las cuales no se puede sustraer la Superintendencia Financiera de Colombia, este organismo sólo podía actuar en el marco de la ley y en la medida en que pudiera probar, de modo fehaciente, cada uno de los supuestos normativos de la captación ilegal necesarios para entrar a determinar la configuración del delito de captación no autorizada de dineros del público. (...)"

En efecto, bajo el marco legal anterior a la expedición de las normas de emergencia, para imponer una medida administrativa por captación no autorizada de dineros se debía probar en todos los casos la captación masiva, acudiendo necesariamente a pruebas documentarias de carácter contable, financiero y testimonial, que permitieran evidenciar el ejercicio de la actividad ilegal, al estar probados para el efecto los supuestos de la captación ilegal de dineros contemplados en el Decreto 1981 de 1988, especialmente los relativos a la información de carácter contable y a los estados financieros del captador.

Antes de la expedición del Decreto 4334 de 2008, para proceder a imponer cualquiera de las medidas cautelares se debía construir un acervo probatorio destinado a establecer desde la identificación del individuo y/o entes involucrados en la actividad o negocio, los nexos y calidades de aquellos, y concurrentemente, a determinar entre otros supuestos la situación patrimonial del posible captador, actividad que se debía cumplir exclusivamente a través de un análisis de la información financiera del mismo para establecer que las obligaciones superaban el 50% de su patrimonio líquido.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2013

1735

Hoja No. 10

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

Un expediente de ese orden se integraba y se hace en la actualidad cuando el análisis se centra en este Decreto, primordialmente por elementos de tipo contable. Todo lo anterior, con estricto respeto del derecho de defensa y el debido proceso.

Y es que, la descripción de los supuestos de captación no autorizada de dineros del público contenida en el Decreto 1981 de 1988 debió complementarse con la expedición del artículo 6 del Decreto 4334 de 2008, en razón a que en la actualidad la práctica de negocios utilizada para captar sin autorización dineros del público se presenta camuflada bajo diferentes modalidades como las enunciadas en la Resolución 1243 de 2013 objeto del recurso de reposición que se analiza.

En efecto, en los nuevos esquemas de captación no autorizada de dineros del público se ha encontrado que no existen libros y papeles del comerciante, que los estados financieros no son preparados conforme a la ley, que no cuentan con los soportes correspondientes, que no tienen auditoría, y que las transacciones se efectúan en efectivo y por ende no quedan rastros documentales para su seguimiento; de este modo el conjunto de elementos que constituye la evidencia probatoria recaudada en las inspecciones es muy limitado.

Los tropiezos que a manera de ejemplo se han expuesto, en la labor que adelanta esta Superintendencia frente a esquemas de negocios o la operatividad de estos últimos, se observaron así mismo en la actuación administrativa que motivó la expedición de la Resolución número 1243 del 5 de julio de 2013 que se recurre, dado que las operaciones objeto de la documentación que fue recaudada en el proceso de liquidación de la sociedad comisionista y que fue remitida a esta Superintendencia, no estaban contabilizadas en dicha sociedad; en ellas se daba cuenta del recibo de los recursos por parte de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO en algunos casos en nombre de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA en su condición de representantes legales de esta última y, en otros casos, actuando en nombre propio o a título personal, modus operandi que se identificaron en el cuadro que consta a folio 7 de la resolución que se recurre.

Como se recordará, dicha medida se fundamentó en el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008, procediéndose a dejar plasmado en la resolución que se recurre el siguiente análisis, luego de detallarse en su considerando noveno, las pruebas documentales y testimoniales recibidas:

"(...) DECIMO: En la presente actuación administrativa se verificó la existencia de hechos objetivos al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008; (...). En efecto, se estableció de manera objetiva con base en el soporte documental y en las pruebas testimoniales recabadas en la presente actuación administrativa que los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, valiéndose de la calidad de representantes legales que ostentaban para la época en la SCBM, así como a título personal, recibieron dineros en cuantía aproximada de trece mil novecientos cuarenta y siete novecientos treinta mil ciento cincuenta y siete (\$13.947.930.157).

Adicionalmente, de la información que reposa en el expediente que hace parte de la actuación administrativa, se evidencia la entrega masiva de dineros a la SCBM por parte de al menos setenta (70) personas con las que celebraron ciento setenta y un (171) operaciones en la cuantía anotada y de las que recibieron los recursos según se explicó, sin dar como contraprestación un bien o servicio, comprometiéndose a reconocer rendimientos por la suma recibida que fluctuaron entre el 7% y el 19% efectivo anual; operaciones para las que ellos ni la SBCM TORRES CORTÉS S.A. estaban autorizados.

(...)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2013

1735

Hoja No. 11

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

Cabe resaltar el hecho que está soportado en la afirmación efectuada por La Liquidadora de la SCBM TORRES CORTES S.A. prevista en el considerando séptimo de la presente resolución, en el sentido de que las operaciones anteriormente referidas "...no se encuentran registradas en la contabilidad..." de la sociedad comisionista de bolsa y que tuvo conocimiento de tales operaciones, descritas en este acto administrativo, a partir de la documentación "...que han facilitado los inversionistas que trajeron sus dineros a esta entidad, los cuales se han presentado a esta entidad averiguando por su inversión."

Así mismo, todas las operaciones que han sido relacionadas en la presente resolución y que están soportadas en documentos firmados por los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTES y/o LEONEL JOSE TORRES JARAMILLO, indican que valiéndose de su condición de representantes legales principal y suplente de la SCBM TORRES CORTES S.A. y/o en nombre propio, realizaron las operaciones de mutuo descritas en precedencia.

Además, en la documentación que soporta la presente actuación administrativa, no existe evidencia de que los recursos recibidos y de los que se da cuenta en este acto administrativo hayan sido destinados al desarrollo de actividades propias de su actividad autorizada como sociedad comisionista de bolsa.

Las operaciones que configuran los hechos objetivos de captación no autorizada de dineros del público objeto de la presente medida administrativa, se llevaron a cabo por los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTES y/o LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO utilizando a la SCBM TORRES CORTES S.A. como representantes legales principal y suplente de la misma y/o en nombre propio o como personas naturales, mediante la recepción de dineros a título de mutuo y la promesa de reembolsar el capital y los rendimientos fijos en los períodos pactados con cada persona que entregó su dinero; en ellas no se dejó claro a las personas que les entregaron dinero que no se trataba de una inversión a riesgo, propia de las operaciones derivadas de la actividad autorizada a la citada sociedad comisionista, sino que se les reconoció rendimientos que como se dijo fluctuaron entre el 7% y el 19% anual, incluso en las supuestas inversiones de renta fija que se mencionan, por ejemplo, en la comunicación del 8 de enero de 2013 cuya imagen se mostró en el numeral 9.2. de la presente Resolución.

El esquema operativo descrito muestra como los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTES y/o LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, aprovecharon el nombre de la SCBM TORRES CORTÉS S.A. en su condición, para la época, de representantes legales de la compañía, para recibir de las personas afectadas dinero a título de mutuo, en la forma indicada en el presente acto administrativo, operaciones que constituyen captación no autorizada de dineros del público en los términos del Decreto 4334 de 2008.(...)"

En razón a lo expuesto y bajo la consideración de la norma que fundamentó la medida cautelar impuesta en el caso bajo análisis, contrario a lo manifestado por el recurrente, esta Superintendencia no se encontraba, como equivocadamente se argumenta en el recurso de reposición, en la obligación de demostrar uno a uno los supuestos a los que alude el Decreto 1981 de 1988, entre ellos, el que las operaciones de captación o recaudo no autorizado de recursos del público superaban el 50% del patrimonio líquido de los destinatarios de la medida administrativa contenida en la Resolución número 1243 de 2013.

Bastó con comprobar tal como quedó acreditado en la citada Resolución 1243 de 2013, el recibo de dineros del público por parte de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, valiéndose de la calidad de representantes legales de la SCBM, así como a título personal de la suma aproximada de trece mil novecientos cuarenta y siete millones novecientos treinta mil ciento cincuenta y siete pesos (\$13.947.930.157) de parte de setenta (70) personas con las que celebraron ciento setenta y un (171) operaciones sin dar como contraprestación el suministro de bienes o servicios, comprometiéndose a reconocer rendimientos por la suma recibida entre el 7% y el 19% efectivo anual.

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

4.2.2. Aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio consagrado en el artículo 208 del EOSF

Yerra el recurrente cuando afirma que en el presente caso, en forma previa a la adopción de la medida cautelar contenida en la Resolución No. 1243 de 2013, debió agotarse el procedimiento establecido en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema por las siguientes razones:

La naturaleza del procedimiento administrativo que se adelanta para efectos de establecer la existencia de la captación no autorizada de dineros del público y los destinatarios del mismo, son diferentes; de aquellos que corresponden al procedimiento administrativo sancionatorio consagrado en el artículo 208 del EOSF.

En efecto, la actuación administrativa adelantada en el caso que nos ocupa, se dirigió contra personas no sometidas a nuestra inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia mientras que el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el citado artículo 208 del EOSF aplica en las investigaciones que se siguen respecto de las entidades vigiladas.

Frente al tema que nos ocupa, es decir, la captación no autorizada de recursos del público en forma masiva, no existe disposición legal que establezca un procedimiento especial que deba cumplirse por parte de este Organismo en la materia.

Ello es explicable dado que la actuación administrativa que se desarrolla para establecer la existencia de la captación no autorizada de dineros del público está revestida de celeridad, atendiendo la finalidad que se persigue con la misma, esto es, lograr la suspensión de una actividad exclusiva de una entidad vigilada por parte de una persona no autorizada ni vigilada por esta Entidad, para luego con el procedimiento de intervención que adopte la Superintendencia de Sociedades, recuperar y devolver los dineros captados ilegalmente.

En tanto que el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 208 del EOSF, se adelanta para verificar si una entidad vigilada por esta Superintendencia o alguno de sus empleados o revisores fiscales han violado alguna de las normas legales a las que se encuentran sujetos. Así, el carácter de esta medida es sancionatorio.

En consecuencia, no sería factible, como lo pretende el recurrente atender unos pasos como los propuestos por el recurrente, que conforman el procedimiento consagrado en el artículo 208 del EOSF², dentro de la investigación que se realice para efecto de establecer si en las operaciones de una persona, no autorizadas por esta Entidad, están configurados los hechos objetivos o notorios, o de los supuestos de captación ilegal de dineros del público.

Lo anterior, a excepción de las actuaciones que se adelantan ante la renuencia de cualquier persona (vigilada o no por la SFC) que, entre otras, no entregue información completa y veraz en las investigaciones que este Organismo lleva a cabo que no fue la motivación que sustentó la Resolución No. 1243 de 2013.

Tal procedimiento ha sido confirmado por el Consejo de Estado³, corporación que ha expuesto en relación con la naturaleza de las medidas administrativas del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como fue la aplicable en el caso que nos ocupa

² Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Magistrado Ponente: Dr. Daniel Manrique Guzmán. Sentencia del 7 de octubre de 1999. Expediente No. 9529.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2013

1735

Hoja No. 13

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

dentro de una actuación administrativa relativa al ejercicio ilegal de la actividad aseguradora, lo siguiente:

"(...) Por lo que se desprende del artículo 108 del EOSF y como bien lo sostienen el a quo y la parte demandada, las medidas de que trata dicha norma son de carácter precautelativo, esto es, que por definición no pueden prever ni admitir el surtimiento de procedimiento previo frente al ejercicio ilegal de la actividad de que se trate, en el caso, la actividad aseguradora.

Es más; tratándose de un procedimiento de policía administrativa, como en efecto lo es el promovido contra los demandantes, el inc. 2º del artículo 1 del Código Contencioso Administrativo, citado por la parte demandada, excluye expresamente de su campo de aplicación las normas de la primera parte de dicho código, en cuanto las decisiones que se profieran son de aplicación inmediata". (Subrayado no corresponde al original)

4.2.3. Derecho de contradicción y debido proceso

Debe anotarse que las dudas que aborda en el recurso el apoderado del señor Leonel José Torres Jaramillo para soportar su análisis, sobre la actividad de captación no autorizada de recursos por parte de sus poderdantes, no se presentaron en el caso que nos ocupa, pues de existir este Organismo se hubiera encontrado imposibilitado legalmente para imponer la medida administrativa respectiva.

Lo anterior, si recordamos tal y como lo comentamos anteriormente que los hechos objetivos o notorios y/o los supuestos para predicar tal conducta ilegal, deben estar demostrados en la actuación administrativa que se adelante y puestos de presente en el acto administrativo que contenga la medida cautelar respectiva, dado que de no estarlo entonces nos encontraríamos ante una falta o falsa motivación de tal acto; lo cual no ocurrió en la presente actuación, en la cual, como se concluye de la lectura de la Resolución número 1243 de 2013, los mismos se plasmaron luego que fueron analizados uno a uno con base en los soportes con los que contó esta Superintendencia para imponer la respectiva medida cautelar; no existiendo duda alguna respecto a los hechos objetivos o notorios a los que alude el artículo 6º del Decreto 4334 de 2008.

Precisamos que en el caso de existir dudas respecto a la existencia o no de una captación o recaudo no autorizado de recursos del público no procede agotar las etapas a las que hace mención el recurrente mediante la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, si tenemos en cuenta que como se dijo, frente al tema que nos ocupa no existe disposición legal que establezca un procedimiento especial que deba cumplirse por parte de este Organismo en la materia.

Ahora bien, el hecho que en las actuaciones administrativas que adelanta esta Superintendencia tendientes a verificar si en el desarrollo de una actividad, una persona incurre en alguna operación exclusiva de las entidades vigiladas por este Organismo y en especial la conducta ilegal que soportó la medida que se recurre, no exista la necesidad legal de agotar un procedimiento específico en forma previa a la adopción de la medida cautelar y, entre ellos, el dispuesto sí para fines sancionatorios, no significa que se esté violando el derecho de contradicción y defensa.

Lo anterior, si recordamos, tal y como se mencionó anteriormente, que la actuación administrativa que adelanta este Organismo inicia frente a la persona cuyas actividades serán objeto de análisis, con el oficio mediante el cual se comunica la práctica de la visita de inspección en el que se indica la finalidad de la diligencia, los miembros de la Comisión dispuesta para tal fin y se le solicita la información que inicialmente se requiere, la cual es aportada por la misma persona.

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

Debe recordarse que por regla general en esta clase de actuaciones adelantadas para establecer la configuración de la captación ilegal, tiene participación la persona o personas investigadas ya que a las mismas se les comunica mediante oficio la realización de la práctica de la visita de inspección⁴, su finalidad, la documentación que debe ser entregada a la comisión de visita para su análisis y, de resultar necesario, que no se presentó en el caso que nos ocupa, se les recibe versión libre en relación con las operaciones que efectuaron.

Es importante mencionar que la actuación que concluyó con la Resolución 1243 de 2013, se llevó a cabo con base en información que fue remitida a esta Superintendencia por la liquidadora de la Sociedad Comisionista de bolsa TORRES CORTÉS S.A., ya que no obstante que se estableció contacto personal con el ex representante legal suplente de esta sociedad, éste no se presentó en ninguna de las oportunidades en las que acordaron reunirse con los funcionarios que integraron la comisión de visita de esta Entidad.

Adicionalmente a la intervención que los destinatarios de la visita de inspección tienen en el desarrollo de la misma, no debe olvidarse que los destinatarios de las medidas cautelares como la que nos ocupa pueden ejercer su derecho de contradicción y defensa con la interposición del recurso de reposición correspondiente, ocasión en la que además de la posibilidad de demostrar el no desarrollo de una captación o recaudo no autorizado de dineros del público desvirtuando los fundamentos con los que contó esta Superintendencia para imponer la medida respectiva, pueden controvertir las pruebas que fundamentaron la medida.

Con el análisis efectuado en esta oportunidad a los argumentos expuestos por el apoderado del señor Torres Jaramillo, han quedado desvirtuados cada uno de ellos y además permiten soportar que no se presentaron los vicios de nulidad por violación al debido proceso y por inexistencia de la prueba requerida en casos como el que nos ocupa para imponer la medida administrativa por el desarrollo de la actividad ilegal, debida sustentación probatoria de la misma, ya que, como quedó demostrado, tales violaciones no ocurrieron.

Lo anterior, si recordamos que el artículo 29 de la Constitución Política establece que: *"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas."*

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio..."

Así, tenemos que el debido proceso es el conjunto de normas y reglas procesales predeterminadas en la Constitución y la Ley, que obligatoriamente debe acatar el Estado en su función punitiva, con el fin de salvaguardar los derechos de los asociados.

Del artículo mencionado se desprende que en relación con el debido proceso, no basta que se respeten todas las garantías para el investigado, si no que es necesario además que se cumplan las formalidades propias del proceso.

⁴ En desarrollo de la facultad de supervisión prevista en el literal a) del numeral 4 del artículo 326 del EOSF, que establece: *"4. Facultades de supervisión. La Superintendencia Bancaria tendrá las siguientes facultades de supervisión:*

"a) Practicar visitas de inspección cuando exista evidencia tendiente sobre el ejercicio irregular de la actividad financiera, obtenida de oficio o suministrada por denuncia de parte, a los establecimientos, oficinas o lugares donde operen personas naturales o jurídicas no sometidas a vigilancia permanente, examinar sus archivos y determinar su situación económica, con el fin de adoptar oportunamente, según lo aconsejen las circunstancias particulares del caso, medidas eficaces en defensa de los intereses de terceros de buena fe, para preservar la confianza del público en general".

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2013 - 1735

Hoja No. 15

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

Lo expuesto, tiene sustento vía jurisprudencial, una de las cuales se encuentra contenida en la emitida por la Corte Constitucional Sentencia T-965 del 8 de octubre de 2004 con ponencia del Dr. Humberto Sierra Porto, oportunidad en la que se expuso:

"...El derecho al debido proceso administrativo es definido, entonces, como (i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. El objeto de esta garantía superior es (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones, y (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica de los administrados..."

Como se observa, si bien la garantía de los derechos del investigado en el proceso administrativo hace parte del llamado principio del "debido proceso", no lo es menos que el menoscabo de éste no solo se agota cuando no se cumple con el derecho de defensa y de contradicción, que se acataron en este caso, sino además, cuando las formalidades propias del proceso que debe adoptarse en la materia no se satisfacen, ya sea porque se omiten, se adicionan otros pasos o se adopta la respectiva decisión sin las formalidades legales que él contenga, o las generales que deban aplicarse, los cuales se cumplieron en el presente caso.

Ahora bien, como quiera que el recurrente manifiesta que este Organismo no verificó la información aportada por la señora liquidadora de la sociedad SCBM a la que hace relación el considerando séptimo de la Resolución número 1243 de 2013, no obstante que la misma solicitó que se hiciera y, por ende, no despejó las dudas que podría tener en relación con ella sobre los involucrados en la actuación, se considera necesario aclararle al doctor Román Fernández, que contrario a esta afirmación, este Organismo no sólo tuvo en cuenta la información enviada por la doctora Nieto López, sino que sobre la base de la documentación remitida inicialmente mediante las comunicaciones radicadas con los números 2013017092-000-000 del 27 de febrero de 2013 y 2013035892-000-000 del 26 de abril de 2013, hubo necesidad de requerir a la agente liquidadora información adicional, tal y como quedó consignado en el considerando décimo del mencionado acto administrativo, sin que se considerara necesario intervención adicional de los destinatarios de la resolución que se recurre, hecho que se plasmó en tal Resolución cuando se expuso:

"Así mismo, mediante el oficio radicado con el número 2013047935-002 del 13 de junio de 2013, en respuesta al requerimiento que le fue formulado por conducto del señor Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores y Otros Agentes, la señora Liquidadora de la mencionada sociedad comisionista de bolsa, informó en relación con la vinculación que hubieren tenido con dicha sociedad, al 19 de febrero de 2013 o en los doce (12) meses anteriores, las ciento cinco (105) personas que presentaron reclamación en el transcurso del proceso de liquidación, lo siguiente:

(...)

"Algunas de las personas estuvieron vinculadas con la comisionista, algunas de ellas, confiaron sus dineros a esta entidad y les emitieron los recibos de caja que adjunte (sic) con la información que les facilité, para lo cual se utilizaron formas continuas utilizadas con el logotipo de esta entidad de las cuales encontré varias cajas con esa papelería y eran tramitadas mediante computador no tenían numeración impresa y tenían el logotipo de esta entidad. También para informarles el estado de la inversión, los intereses devengados, les enviaban unos informes con otro logotipo de esta comisionista.

(...) La mayoría de las personas desconocía donde les invertían su dinero, en algunas ocasiones hasta se los recogían en sus residencias."

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2013 - 1735

Hoja No. 16

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

La verificación que se efectuó también se realizó frente a la Bolsa Mercantil de Colombia, lo que se relacionó así en la Resolución número 1243, *"En igual sentido y en respuesta al requerimiento también formulado por el señor Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores de esta Superintendencia, el Presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, a través del oficio radicado con el número 2013047071-001 del 5 de junio de 2013, manifestó en relación con las ciento cinco (105) personas ya referidas que, bajo la intermediación de la sociedad Torres Cortés S.A., para el mismo período comprendido entre el 19 de febrero de 2013 y en los doce (12) meses anteriores, setenta y nueve (79) personas (...) no se encuentran en la base de datos del Sistema de Información Bursátil (SIB) del escenario de la Bolsa Mercantil, motivo por el que confirmamos que NO efectuaron operaciones como comitentes en los mercados administrados por la Bolsa..."*.

De la relación de las personas, el número de operaciones y la cuantía de estas últimas conforme a indicado por la Liquidadora y la BMC, se dará cuenta en este acto administrativo".

Además de lo anterior, este Organismo procedió a analizar la totalidad de la información aportada por la misma, hecho del que también se da cuenta en la resolución que se recurre, cuando se indicó:

"Del análisis efectuado por esta Superintendencia a la información anexa a la comunicación de la citada Liquidadora, se estableció que setenta (70) personas de las ciento cinco (105) que presentaron reclamaciones ante la Liquidadora de la SCBM, entregaron recursos a los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTES y/o LEONEL JOSE TORRES JARAMILLO, en su condición de representantes legales principal y suplente de dicha Sociedad Comisionista de TORRES CORTES S.A. en cuantía aproximada de trece mil novecientos cuarenta y siete millones novecientos treinta mil ciento cincuenta y siete pesos (\$13.947.930.157), en ciento setenta y un (171) operaciones, las cuales como se dijo, no están registradas en la contabilidad de la SCBM".

El análisis de la documentación allegada, permitió determinar que setenta (70) personas entregaron sus recursos en cuantía de aproximadamente trece mil novecientos cuarenta y siete millones novecientos treinta mil ciento cincuenta y siete (\$13.947.930.157) en 171 operaciones, a los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTES y/o LEONEL JOSE TORRES JARAMILLO, bajo el convencimiento de que éstos se los recibían en representación de la SCBM, actuando como representantes legales principal y suplente de la citada SCBM TORRES CORTÉS S.A., y/o "...en Nombre Propio" o a título personal, conviniendo con las personas que entregaron los dineros, entre otras cosas, el monto del préstamo, la tasa del interés que fluctuó entre el 7% y 19% efectivo anual y el plazo al que se sujetaba la obligación.

La anterior conclusión no fue plasmada a la ligera sino, se insiste, luego del análisis de la documentación aportada por la doctora Nieto López verificada por la misma y con la Bolsa Mercantil de Colombia y, además, con seis (6) declaraciones juramentadas recibidas por esta Superintendencia a igual número de personas que entregaron recursos a los mencionados señores bajo la modalidad ampliamente explicada en la resolución que se recurre y que constituía una captación o recaudo no autorizado de recursos del público en forma masiva.

De las mencionadas declaraciones juramentadas se hizo referencia en la Resolución número 1243 de 2013 en el numeral 9. 5, cuando se expuso:

"Obran en la presente actuación administrativa las declaraciones juramentadas rendidas por seis (6) afectados que entregaron dinero bajo las características ya explicadas, las cuales se recaudaron en la actuación administrativa adelantada por esta Superintendencia a la Sociedad Torres Construcciones y Valores S.A.S. - TCVAL S.A.S, ordenada mediante el oficio número 2013017138-001-000 del 27 de febrero de 2013 cuyo informe de inspección y expediente, como se expuso, forma parte integral de este trámite.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**RESOLUCIÓN NÚMERO****DE 2013****1735****Hoja No. 17**

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

De las declaraciones mencionadas, se resaltan los siguientes aspectos comunes:

- Las personas declararon haber entregado sus recursos bajo el entendido que se vinculaban a la SCBM TORRES CORTES S.A.
- En las operaciones realizadas por las personas que entregaron dinero se hace referencia a un reconocimiento de interés anual por parte de la SCBM TORRES CORTES S.A.

Confirma aún más la existencia del análisis que llevó a cabo esta Superintendencia a la información aportada por la señora liquidadora, el hecho que la Resolución número 1243 de 2013 no hace relación frente a los señores Torres Jaramillo y Torres Cortés del recibo de los dineros a 105 personas que fueron las que presentaron reclamaciones en el proceso de liquidación, sino de 70 de ellas; así, de haberse tomado sólo los datos aportados inicialmente, este Organismo hubiera soportado la medida cautelar sobre el número indicado por la doctora Nieto López, lo cual no sucedió.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se observa que en el presente caso se atendieron las reglas relativas en cuanto a la competencia del funcionario que adoptó la decisión; al procedimiento aplicable para el efecto originado en el caso que nos ocupa en la información aportada por la señora liquidadora de la SCBM, la verificación de la misma así como con las pruebas testimoniales recibidas, actuación administrativa donde se recopiló el material probatorio para evaluar la configuración de los hechos objetivos o notorios a los que alude el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008, en concordancia con los supuestos para predicar una captación o recaudo no autorizado de recursos del público señalados en el artículo 1° del Decreto 1981 de 1988, acervo probatorio que sustenta la medida administrativa impuesta por esta Superintendencia según consta en la Resolución No. 1243 del 05 de julio de 2013, las cuales fueron recabadas en forma legal.

Como consecuencia de lo anterior y como quiera que han quedado desvirtuados los argumentos expuestos por el recurrente para revocar la Resolución número 1243 de 2013, procediendo entonces a dejar incólume la Resolución recurrida.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, mediante la cual esta Superintendencia impuso una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.016.770-5, así como respecto a esta última.

ARTÍCULO SEGUNDO. COMUNICAR la presente Resolución a la Superintendencia de Sociedades, para los fines propios de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO. COMPULSAR copias de la presente Resolución a la Fiscalía General de la Nación para los fines pertinentes en las investigaciones de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. NOTIFICAR personalmente al doctor LUIS FERNANDO ROMÁN FERNÁNDEZ identificado con la C.C. 7524891 y con la T.P. No. 126.899 del Consejo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO

DE 2013

1735

Hoja No. 18

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 1243 del 05 de julio de 2013, expedida por esta Superintendencia, mediante la cual se adoptó una medida administrativa respecto de los señores JOSÉ LEONEL TORRES CORTÉS y LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO, identificados con las cédulas de ciudadanía números 17.040.571 y 79.524.060, por las actuaciones que realizaron en su calidad de representantes legales principal y suplente de la sociedad TORRES CORTÉS S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, identificada con el NIT 800.018.770-5, así como respecto a esta última.

Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado del señor LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO con cédula de ciudadanía número 79.524.060, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de la misma, y advirtiéndole que contra ella no procede ningún recurso, quedando agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D. C., a los

23 SET. 2013

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO ADJUNTO
PARA SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL**

JUAN PABLO ARANGO ARANGO

Notificar a:

Doctor
LUIS FERNANDO ROMÁN FERNANDEZ
Apoderado del señor LEONEL JOSÉ TORRES JARAMILLO
Calle 97 No. 14-17; Oficina 401
Bogotá

Superintendencia Financiera de Colombia
Grupo de Correspondencia
DOCUMENTO ORIGINAL RETIRADO A LA MANO POR:

Nombre: Edna
Firma: [Firma]